

Cuba: la reforma económica, la reestructuración social y la política

Haroldo Dilla Alfonso

Resumen

La idea central manejada en este artículo refiere que la reforma económica realizada en Cuba está creando un entramado social que pudiera conducir a una restauración del capitalismo. Sin embargo, sostiene que no necesariamente tiene que derivar en esto ya que existen vías alternativas para la continuidad socialista, lo que implica poder potenciar al sujeto popular, e incluso a los nuevos actores sociales y políticos de los sectores tecnocrático-burocráticos, en los nuevos escenarios creados a partir de las reformas; que al realizarse ha habido una reestructuración social, que a su vez tendría que corresponderse en el plano político como también ideológico. La reflexión pasa por sugerir la ampliación de los espacios de participación popular con una mayor autonomía y, en esencia por redimensionar y rediseñar el conjunto del sistema político cubano.

Abstract

The central idea of this article refers that the economic reform realized in Cuba is being creating a social framework that could lead to a restoration of capitalism, but it's not necessarily, because there are alternatives for socialist continuity. So it's important to potentialize popular subject, and even the new social and political subjects of technocratic-burocratic sectors, in the new scene created with the reforms; those means a social restructuration according to a specific political model such as an ideological one. This reflection suggest the increase of popular participation spaces with larger autonomy and, in essence, to rebuilt the whole Cuban political system.

Resulta axiomático afirmar que la sociedad cubana contemporánea cambia al calor de la reforma económica, y que todo ello repercute en la política, produciendo redistribuciones de poderes que tarde o temprano se deberán expresar en las instituciones políticas. Menos claro es, sin embargo, cuáles podrían ser los resultados sistémicos de este proceso. Una idea central que anima este artículo es que la reforma está creando un entramado social básico que pudiera conducir a una restauración capitalista en el país. Otra idea central es que este no es un resultado inevitable, y que existen vías alternativas para la continuidad socialista que implicaría potenciar al sujeto popular en los nuevos escenarios creados.

Nivelación y movilidad social

Cualquier valoración sobre la composición social cubana y sus efectos en la política, incluso en sus tendencias actuales, tiene que partir de un hecho his-

tórico: la radicalidad de la Revolución iniciada en 1959 que condujo a la virtual liquidación de los sectores burgueses y de buena parte de la clase media, los cuales emigraron o experimentaron un proceso de proletarización. La sociedad, remitida así al concepto estricto de "pueblo", fue paulatinamente organizándose en torno al predominio de formas sociales y estatales de propiedad de los medios de producción.

Al mismo tiempo, esta nivelación social fue acompañada de un fuerte proceso de movilidad ascendente de las mayorías, apoyado en programas estatales de provisión de empleos y de servicios sociales. Sólo a modo de ilustración, en 1953 el 57 por ciento de la población habitaba en zonas urbanas, los analfabetos eran algo menos de una cuarta parte de la población y sólo el 11 por ciento de ésta poseía nivel medio o superior. En 1981 estos índices habían variado significativamente. El 69 por ciento de la población vivía en zonas urbanas, el analfabetismo había sido virtualmente liquidado y el 41 por ciento de la población poseía más de 6 grados de enseñanza. Hacia 1989, último año en que fueron publicados los anuarios estadísticos, se reportaban algo más de 10 y medio millones de habitantes, el 73 por ciento de los cuales vivían en zonas urbanas. Aproximadamente el 38 por ciento de la población total habitaba en ciudades de más de cien mil habitantes. El número de técnicos y profesionales rondaba el medio millón, mientras que cerca de 140 mil personas se encontraban cursando la enseñanza superior. Un dato interesante es que en 1989 se graduaron en las universidades cubanas 33 mil 199 personas, más de la mitad de las cuales eran mujeres.¹

Esta intensa movilidad social, aún cuando conducía a una diferenciación objetiva de los sujetos, no repercutió proporcionalmente en un autorreconocimiento de las identidades sectoriales, lo cual estaba condicionado por diversos factores que tendían a enfatizar el concepto de "pueblo" como vehículo sociopolítico de la transformación social y la defensa nacional. El sistema político dio cuenta de esta situación mediante su adscripción al modelo leninista de organizaciones sectoriales que actuaban como "correas de transmisión" entre la totalidad de la población y la "vanguardia política" organizada en el Partido Comunista.

La historia se ha ocupado de mostrar tanto las virtudes como los inconvenientes de este tipo de ordenamiento de la regulación sociopolítica. Mientras se trató de una sociedad con un bajo nivel de lo que Giddens ha denominado

¹ Datos extraídos de los anuarios del *Comité Estatal de Estadísticas*, particularmente de 1981 y 1989, así como —de la misma institución—, del Comunicado acerca de los resultados del *Censo de Población y Vivienda de 1981*, La Habana, agosto, 1983.

“universalización y reflexividad social”,² este esquema de regulación política funcionó con eficacia. Por un lado permitió enfrentar con éxito el peligro externo representado verazmente por la agresividad norteamericana y, al menos hasta los setenta, por el aislamiento regional impuesto al país. En un segundo plano, son perfectamente conocidos los logros sociopolíticos alcanzados por la sociedad cubana, tales como un bienestar modesto pero equitativo y ajeno al consumismo, una cultura política solidaria y un vasto entramado de participación y movilización popular, entre otros.

Sin embargo, este esquema contenía en sí serias contradicciones emanadas de sus propósitos declarados de socialización del poder –lo que en el discurso oficial era enunciado como el establecimiento de un auténtico poder del pueblo– y su apropiación paulatina por una capa burocrática emergente durante los sesenta y definitivamente consolidada en la década siguiente a la sombra de un sistema económico severamente centralizado y de un aparato político de igual signo, y con una alta capacidad de convocatoria y de producción ideológico-cultural. La burocracia comenzó a asumir un rol cada vez más importante en la mediación entre el liderazgo revolucionario y las masas populares, en la asignación de recursos, en la comunicación política y en el control y la promoción social, con la consiguiente extensión de las relaciones paternalistas-clientelistas.

En términos sistémicos, la consolidación de un estamento burocrático sólo pudo conseguirse al precio de una detención del proceso de socialización del poder y por consiguiente del congelamiento del desarrollo socialista del proyecto.³ Pero esencialmente dejó en pie una contradicción entre la alta calificación del sujeto social y la rigidez de los mecanismos de control sociopolítico, lo que tendía a producir disfuncionalidades tales como la apatía y la anomia políticas, lo que en Cuba se ha consagrado con el término de “doble moral”.⁴

² Anthony Giddens, *Más allá de la izquierda y la derecha*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1996.

³ He discutido esta forma específica de organización societal, sus logros y contradicciones, en dos artículos. El primero, titulado “Cuba: la crisis y la rearticulación del consenso político” fue originalmente publicado en *Cuadernos de Nuestra América*, La Habana, Centro de Estudios sobre América (CEA), núm. 20, 1993. El segundo artículo se titula “Cuba: ¿cuál es la democracia deseable?”, publicado en Haroldo Dilla (comp.), *La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos*, La Habana, CEA, 1995. Por estas razones no me detengo más en este asunto cuya comprensión resulta vital para entender las complejidades de la situación presente.

⁴ El reconocimiento público de estos fenómenos políticos negativos y de la necesidad de una renovación en este sentido, provino de los propios medios oficiales, lo que ha quedado explícito en varios documentos públicos y particularmente en el llamamiento efectuado por el Partido Comunista para una discusión popular en torno a la agenda de su IV Congreso. El texto de este llamamiento fue publicado por *Cuadernos de Nuestra América*, La Habana, CEA, núm. 15, julio-diciembre, 1990. Lamentablemente la aguda crisis económica desatada desde 1990 sepultó este impulso inicial.

Esta situación comenzó a experimentar un cambio radical cuando, desde fines de los ochenta, la sociedad cubana se vio obligada a buscar su inserción al mercado mundial capitalista sobre bases competitivas, y en consecuencia a producir un rediseño interno mediante lo que hoy se conoce como la "reforma económica".⁵

El proceso de adaptación de la economía cubana a las exigencias del mercado mundial guarda notables diferencias con procesos dirigidos al mismo fin en otros países latinoamericanos. Por un lado, la dirigencia política nacional ha tratado de evitar los aspectos más gravosos del ajuste, manteniendo la gratuidad y el acceso universal a los servicios sociales fundamentales y proveyendo a la población de un consumo alimentario básico subsidiado, al mismo tiempo que el Estado conserva un rol significativo como propietario y como regulador. Por otro lado, la apertura de Cuba al mercado mundial se realiza en un contexto marcado por la agresividad de Estados Unidos y su intento de estrechar el bloqueo económico a un nivel francamente genocida, lo que imprime a la reforma una sensación de riesgo inminente, e implica costos superiores en todos los sentidos. Por último, aquí no se trata, como en otros países latinoamericanos, de una simple variación de un código operacional capitalista, sino de la reestructuración radical de la economía política, de los modos de regulación social y de la producción ideológica-cultural prevalecientes en décadas anteriores.

Posiblemente sea este último el signo más trascendente del proceso de reforma: la paulatina colonización mercantil de los ámbitos de acción social y por consiguiente el planteamiento de retos multidimensionales que atañen al tema central de la política: la distribución del poder.

Reforma económica y reestructuración social

En las condiciones presentes es poco probable la realización de un análisis empíricamente fundamentado del proceso de reestructuración que experimenta la sociedad cubana. En primer lugar, se trata de un proceso de cambios tan incipiente como vertiginoso, lo que expone al analista a ser sobrepasado por la marcha de los acontecimientos. Por otro lado, no se publican estadísticas oficiales en Cuba desde 1989, lo que obliga a procesar informaciones dispersas y poco diáfanas. Por esta razón las páginas siguientes tratan de describir sólo aquellas tendencias de cambio más visibles, haciendo notar que me refiero casi

⁵ Una aproximación al proceso de reforma en Cuba, particularmente en sus primeros tres años, puede hallarse en Pedro Monreal y Manuel Rúa, "Apertura y transformación de la economía cubana: las transformaciones institucionales", en *Cuadernos de Nuestra América*, La Habana, CEA, núm. 21, enero-junio, 1994.

exclusivamente a las transformaciones socioclasistas, no así a otras dimensiones (géneros, generaciones, etcétera) que merecen un tratamiento especial.

a) Desde la óptica que aquí nos ocupa el resultado más sobresaliente del proceso de apertura y reforma económica ha sido la incipiente conformación de un nuevo bloque social –que aquí denominaremos “tecnocrático-empresarial”–, en el cual es posible distinguir tres componentes fundamentales:

– Un primer componente de este bloque emergente está ubicado en el ámbito de la inversión extranjera. Según las cifras disponibles, en 1994 existían 176 asociaciones con capital extranjero, lo que ascendía a unos mil 500 millones de dólares. Pertenecían a 36 países y estaban establecidas en 26 ramas. Al mismo tiempo, se contaba con la presencia de unas 400 firmas comerciales.⁶ Un año más tarde el número de inversiones ascendía a 212, y en un informe de principios de 1996 se vaticinaba un crecimiento del 27 por ciento. Por entonces las empresas vinculadas al capital foráneo empleaban a 53 mil trabajadores, alrededor del 5 por ciento de la fuerza laboral empleada.⁷

En la misma medida en que se trata regularmente de asociaciones con el Estado, este sector está estrechamente relacionado con una capa de empresarios y gerentes nacionales que comparten experiencias vitales, modos de vida y aspiraciones sustancialmente diferentes del resto de la población. Las tendencias actuales de la economía apuntan hacia la expansión de este sector, con la singularidad de que esta expansión se produce en las áreas más dinámicas de la economía, lo que le otorga una mayor relevancia por su posicionamiento cualitativo que por cualquier otra consideración de orden cuantitativo;

– El segundo componente de este bloque emergente estaría formado por los directivos de las empresas estatales que han logrado posiciones ventajosas en el mercado mundial (se calcula que cerca de un 20 por ciento de las empresas nacionales), y por consiguiente cuotas superiores de autonomía. Estas nuevas atribuciones son incompatibles con la tradicional figura del administrador de bienes públicos en el marco de la economía centralmente planificada, siempre encerrado en la trágica triada del no saber, no poder o no querer. En su lugar emerge un nuevo tipo de empresario nacional, más preocupado por la maximización de ganancias que por otras consideraciones políticas. El número de

⁶ Estos datos fueron ofrecidos en la XII Feria Internacional de La Habana. La apertura de la feria estuvo a cargo de un alto dirigente político quien aseguró a los empresarios allí reunidos: “Les ofrecemos un país ordenado. Una política de apertura a la inversión de capital coherente e irreversible. Una infraestructura económica coherente y extendida. Un sector productivo en proceso de cambio hacia la eficiencia. Un pueblo trabajador y abnegado con un alto nivel educacional y técnico. Una sociedad que no conoce del terrorismo ni de las drogas. Les ofrecemos una nación soberana y un gobierno honrado e incorruptible”. *Cuba Foreign Trade*, july-december, 1994.

⁷ Periódico *Granma*, La Habana, 26 de marzo, 1996.

empresas ubicadas en este rango también deberá seguir aumentando con el transcurso de la reforma, y.

- Un tercer componente (potencial) de este bloque está representado por aquellas personas (campesinos acomodados, intermediarios comerciales, proveedores de servicios, etcétera) que han acumulado fuertes sumas monetarias mediante la especulación en el mercado negro, frecuentemente a expensas de los recursos estatales. Dado que la mayor parte de las fortunas acumuladas por este sector tiene un origen ilícito, es imposible cuantificar su potencial económico. Pero es posible acercarnos a su dimensión a través del análisis de la estructura de las cuentas corrientes, donde se deposita aproximadamente el 60 por ciento del total de la liquidez monetaria y que ha presentado en los últimos años una preocupante tendencia a la concentración. Hacia mediados de 1995 se reportaban cerca de 6 millones de cuentas de ahorro que guardaban 5 mil 890 millones de pesos. Pero de este total sólo el 14.1 por ciento concentraba el 77.8 por ciento de los ahorros.⁸

Con las acciones de liberalización en los mercados agropecuarios y de productos industriales, así como con la apertura del trabajo por cuenta propia, este sector no sólo ha incrementado y "blanqueado" sus fortunas, sino también ha ganado un mayor control de los circuitos de circulación y realización del mercado interno. Es esperable que en un futuro no lejano este sector tendrá un rol inversionista en la pequeña y mediana empresa y en contrataciones con el sector formal de la economía, lo que le ampliará sus posibilidades de acumulación.

b) Desde la acera opuesta, otro sector social que ha experimentado notables cambios internos es el correspondiente a los asalariados estatales, particularmente la clase obrera. Hasta 1989 alrededor de 3,5 millones de personas, el 94 por ciento de la fuerza de trabajo empleada en el sector civil, eran asalariados de la economía estatal, organizados sindicalmente en su inmensa mayoría y amparados por un código del trabajo muy paternalista.

La crisis y el proceso de reformas han producido un triple efecto sobre este sector. En primer lugar, su debilitamiento económico como consecuencia de la dolarización de los precios de la mayoría de los bienes de consumo y servicios económicos y de la permanencia de salarios diseñados para un consumo subsidiado. En segundo lugar, se ha producido una reducción del sector, relativa

⁸ Banco Nacional de Cuba, *Informe Económico de 1994*, agosto, 1995. Ver también el informe sobre el plan económico y social para 1996 presentado por el Ministro de Economía a la Asamblea Nacional del Poder Popular, *Granma*, 27 de diciembre, 1995. Debe tenerse en cuenta que sólo me refiero a los depósitos en pesos cubanos. Probablemente estos datos serían más sorprendentes si consideráramos la cantidad de dólares en manos de este sector, así como los miles de millones, no depositados, lo cual no se ofrece por falta de información.

(disminución porcentual como consecuencia de la menor captación de fuerza de trabajo) y absoluta (expulsión de fuerza de trabajo de empresas e instituciones estatales), lo cual, de aplicarse con más rigor en las empresas productivas y de servicios económicos, conduciría a una virtual desproletarización. En tercer lugar, y quizás este sea el dato más relevante, se viene produciendo una fragmentación según la ubicación de los trabajadores en áreas privilegiadas por la nueva dinámica económica (con altos salarios y otras estimulaciones) o en sectores tradicionales mercado internistas. Se trata de una virtual remodelación de la clase obrera y asalariados en general por el capital internacional. Esto pudiera consolidar en el futuro un remedo de "aristocracia obrera" –ligada al sector público o privado– tendencialmente cooptable por el bloque tecnocrático empresarial.

c) Un segundo componente estaría dado por los sectores de pequeños campesinos y de productores agrícolas asociados en cooperativas que por diversas razones no han logrado un nivel alto de atesoramiento. Este sector había experimentado una gradual disminución absoluta desde el triunfo revolucionario, de manera que si en 1970 constituían el 11 por ciento de los empleados en el sector civil, en 1989 eran sólo el 5 por ciento. Con la creación en 1993 de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), esta situación experimentó una dramática reversión, y aunque no existen estadísticas oficiales, se calcula que cerca de 400 mil personas han engrosado el sector de productores agrícolas y que el número podría aún crecer más en el futuro.

Por su trascendencia, vale la pena detenerse en la experiencia de las UBPC.

Las UBPC fueron creadas como una respuesta estatal para obtener de manera descentralizada mejores rendimientos agrícolas. Una parte muy significativa de la tierra estatal fue cedida en posesión a grupos de trabajadores. El liderazgo cubano mostró sagacidad al no diluir las incapacidades estatales en el individualismo, promoviendo en su lugar organizaciones cooperativas y de gestión colectivas allí donde ha sido viable. Sin lugar a dudas, la creación de las UBPC ha constituido el paso socializador más audaz dado por la Revolución Cubana en los últimos lustros.

Sin embargo, habría que reconocer que el establecimiento de las UBPC careció desde sus inicios de una clara percepción política lo que, dos años después, aún les marca con un sello utilitario e inmedatista. En un inicio las UBPC nacieron constreñidas burocráticamente al no contar con acceso libre al mercado y estar sujetas a los andamiajes administrativos de las empresas estatales. Desde fines de 1994 fue viabilizado el acceso al mercado, lo que sin lugar a dudas ha producido una dinamización de estas instituciones. Pero, sin otras acciones políticas tal dinamización pudiera adoptar un curso específico en detrimento de sus roles sociales y sus niveles de democracia interna. Un rasgo muy comentado

de los proyectos cooperativos a nivel mundial ha sido sus tendencias a evolucionar desde proyectos democráticos, equitativos y socialmente comprometidos a situaciones de oligarquización, creciente desigualdad y relaciones depredadoras con sus entornos sociales. La evitación de estos efectos no dependerá del éxito económico –si bien éste es indispensable– sino del diseño político general en que tales cooperativas se inserten.⁹

d) Desde fines de 1993, con la legalización del trabajo por cuenta propia, han comenzado los negocios privados fundamentalmente en la provisión de servicios y de alimentos. Aunque en el llamado “cuentapropismo” se esconden verdaderas fortunas que han logrado las mejores posiciones y se ha afrontado con éxito la escalada impositiva no progresiva¹⁰ del gobierno, la inmensa mayoría de los negocios amparados bajo esta ley son pequeñas unidades individuales o familiares cuyos ingresos netos, aun cuando superan con mucho los percibidos por la mayoría de los trabajadores del sector formal, no permiten una base para la acumulación. Hacia febrero de 1994 existían en el país 142 mil cuentapropistas legalizados, cifra que había ascendido en junio a 160 mil, y a 208 mil 346 en enero de 1996. El crecimiento sostenido, sin embargo, no refleja exactamente la verdadera dinámica de este proceso. A la altura de la última fecha citada se habían producido 401 mil 847 solicitudes de licencias, y habían abandonado la actividad unas 158 mil 597 personas, lo que habla de una alta inestabilidad. Sólo el 0,9 por ciento del total en activo se ubicaba en las áreas más lucrativas, los restaurantes privados, y el 27 por ciento en pequeños puestos de expendio de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por entonces el 26 por ciento de los cuentapropistas eran al mismo tiempo trabajadores del sector formal, el 30 por ciento desempleados, el 18 amas de casa (eufemismo que frecuentemente designa a la mujer desempleada) y el resto jubilados, lo que habla de un resultado discreto en cuanto al objetivo declarado de generación de empleos. El 73 por ciento de los portadores de licencias eran hombres, lo que lleva a pensar en un rol subordinado de la mujer como apoyo de la actividad económica. Un dato interesante es que el 80 por ciento de los cuentrapropistas legalizados poseía más de 9 grados de educación.¹¹

⁹ Un análisis empíricamente fundamentado de las UBPC hasta mediados de 1994 puede encontrarse en: Niurka Pérez y Cary Torres, “UBPC: hacia un nuevo proyecto de participación”, en Haroldo Dilla (comp.), *La participación en Cuba y los retos del futuro*, La Habana, CEA, 1996.

¹⁰ El gobierno cubano ha declarado su intención de establecer impuestos progresivos en el futuro, cuando posea información veraz sobre los volúmenes de venta e ingresos netos. Mientras tanto, el sistema establecido es fijo, lo que perjudica seriamente a los pequeños negocios en beneficio de aquellos que poseen un capital inicial suficiente y alienta la concentración en el sector cuentapropista.

¹¹ Tania García, “¿Cuentapropismo o economía popular?”, Ponencia presentada al taller *Municipios, economía local y economía popular*, La Habana, CEA, 7-8 de marzo, 1996.

Nada indica que no podamos concebir a los cientos de miles de cuenta-propistas cubanos como componentes objetivos del sujeto popular. Pero al mismo tiempo, ningún sitio pasivo en la estructura social garantiza que estos grupos, crecientemente educados en la acción individual, no puedan derivar en base social de la restauración capitalista en el país. Posiblemente sea aquí, y en los nuevos grupos de cooperativistas agrícolas, donde se plantea el mayor reclamo de una nueva forma de hacer política en función de la continuidad socialista.

e) La sociedad cubana comienza a aprender a vivir con el fenómeno del desempleo. El Estado ha tratado de evitar por todos los medios el enraizamiento del desempleo abierto mediante la puesta en práctica de planes de entrenamiento laboral, la oferta de nuevas opciones de empleo (estatales o privadas) y la posposición de la expulsión de la fuerza de trabajo supernumeraria. Pero la población desempleada debe seguir creciendo en los próximos años aun cuando la economía logre crecimientos efectivos, precisamente porque una de las condiciones para el crecimiento, de acuerdo con las pautas del nuevo esquema económico, es la expulsión de una fuerza de trabajo supernumeraria que pudiera ascender a 600 mil personas. Según cálculos extraoficiales, el desempleo abierto debe oscilar en torno a un 10 por ciento de la población económicamente activa. Sólo en Ciudad de La Habana, donde las ofertas de empleos son mayores que en otras zonas del país, se reportaba algo más de un 8 por ciento de desempleo a fines de 1995.

Las nuevas coordenadas de la política

Contrariamente a las predicciones de la derecha acerca del inminente derrumbe del régimen cubano, éste ha mostrado una sorprendente capacidad para retener el poder político en medio de una aguda crisis económica, y hacerlo contando a su favor con un apoyo ampliamente mayoritario de la población. Esto ha constituido una verdadera proeza política de repercusión continental y un legado invaluable para el movimiento popular a nivel mundial. Pero la valoración positiva no debe conducir a equívocos. Haber evitado el colapso económico, y con ello la revancha contrarrevolucionaria de Miami, no significa haber garantizado la continuidad del proyecto socialista. Ha exigido un precio. Y una de sus facetas es precisamente una alteración gradual de las relaciones sociales de poder que pudiera conducir a una restauración capitalista en el país.

La sociedad cubana experimenta un proceso de rearticulación de las alianzas sociales, que tiene su punto neurálgico en la relación biunívoca entre la buro-

cracia tradicional y el bloque tecnocrático empresarial emergente. Como decía antes, la primera logró su consolidación como estamento en los setenta, con la implementación del modelo de crecimiento extensivo centralmente planificado y del proceso de institucionalización del sistema político. La crisis de los noventa resquebrajó muchas de sus capacidades regulativas, desde la asignación vertical y jerárquica de recursos hasta la producción de una ideología legitimadora creíble. Sin embargo, el sector burocrático ha mostrado una notable habilidad para manejar la irrupción del mercado y de los actores vinculados a éste, dada su capacidad para proveer el control social imprescindible para la acumulación, a cambio de los excedentes económicos necesarios para la reproducción del proyecto sectorial de poder. En última instancia, los nuevos gerentes y empresarios provienen de su seno o han sido formados desde sus políticas en curso. Aquí reside la esencia de la cada vez más usual invocación de un modelo chino edulcorado que enaltece sus logros económicos y consumistas y omite sus deprimentes resultados sociales, políticos, culturales y ecológicos. Y también la base social para un termidor cubano.

Las principales limitaciones para el despliegue de esta relación de poder y la consiguiente consolidación de un nuevo bloque hegemónico están dadas por factores coyunturales y estructurales. En el primer sentido, el estado actual de la reforma económica en Cuba aún mantiene una fuerte compatibilidad de los sectores económicos. La acción del mercado es en este sentido limitada por el Estado, lo que dificulta las relaciones horizontales entre los distintos componentes mencionados, e incluso dentro de cada sector. Salvo asociaciones muy difusas, y aun de poca relevancia (como una recientemente anunciada "Asociación de Empresarios Españoles"), no hay grupos corporativos empresariales. Ello, además, circunscribe sus áreas de decisión al campo económico con poco acceso a las estructuras políticas propiamente dichas.

En un plano estructural, hay un rango de singularidad que proviene de la precedencia de una revolución de vocación socialista, apoyada en una alianza de las clases populares con la élite política emergida del hecho revolucionario y animada por una cultura política solidaria y patriótica. Como antes anotaba, los signos de cautela mostrados por la dirigencia política frente al avance del mercado y de la reforma, no importa ahora la valoración técnica que merezcan, expresan la permanencia de este compromiso social básico. Sólo que esta condicionante estructural puede también ser diluida por la fuerza del mercado si no implica la renovación del propio bloque popular, y su proyección como una fuerza autónoma y con posicionamientos políticos propios. Seguramente aquí también se requerirá mucha audacia, mucho más que la que los programadores económicos reclaman para llevar a buen término el acceso al mercado mundial.

Repensar el futuro desde la izquierda

Repensar al futuro cubano desde una perspectiva de izquierda es una necesidad que rebasa al marco nacional. La resistencia cubana en pos de su independencia nacional y de sus conquistas sociales despierta la admiración del mundo entero y vertebró un movimiento solidario de gran significado moral y político. Para todos esto es muy importante pero no suficiente. Cuba ofrece otra oportunidad: la de ser un componente de un proyecto anticapitalista en formación que aun cuando tenga diferentes concreciones nacionales, sólo podrá ser viable a escala internacional. No tenemos más opción que movernos incesantemente, aunque nuestra marcha vaya acompañada de los ladridos de quienes están confluyendo en el marasmo de la desesperanza y el fatalismo.

Ante todo, se trata de la economía. Ningún proyecto político sería viable si no se apoya en una dinámica económica que garantice la reproducción ampliada. Pero si de socialismo hablamos, habría que reconocer que no se trataría de cualquier tipo de reproducción.

Cuba enfrenta retos de sobrevivencia muy agudos que no sólo se vinculan con su condición de país tercermundista, sino también al efecto negativo del bloqueo norteamericano. Ello implica –desechada la autarquía– la aceptación de un conjunto de reglas de juego propias del mercado mundial en la era de la llamada globalización. Pero no la aceptación fatalista de tales reglas y mucho menos que sea imposible encontrar sendas alternativas que modifiquen sustancialmente los escenarios existentes.

De hecho, el gobierno cubano ha dado muestras de una alta sensibilidad social que ya de por sí implica una base para construir la alternativa y, ciertamente, un sentimiento raro en las políticas públicas a nivel mundial. Pero de lo que se trata es de una variación sustancial del concepto mismo de desarrollo económico y del lugar del sujeto popular en el trazado de metas y diseño de acciones. Se trataría, en primer lugar, de la construcción de una economía popular entendida (y aquí empleo una definición muy usual) como el conjunto de actividades productoras o proveedoras de servicios realizadas por agentes individuales o colectivos que dependen (fundamentalmente) para su reproducción de la continuada realización de su fondo de trabajo propio, y cuyo rasgo distintivo sería la autorregulación basada en principios solidarios y asociacionistas.¹²

En el caso cubano, esta necesidad remite al establecimiento de un entramado de relaciones horizontales que incluya proyectos autogestionarios, cooperativas de productores de bienes y servicios, asociaciones de consumidores

¹² José Luis Corraggio, "De la economía informal a la economía popular", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 131, mayo-junio, 1994.

y las propias instituciones políticas y estatales democráticas existentes en los territorios, de tal manera que las relaciones políticas solidarias actúen como condicionadoras de las conductas y las dinámicas internas de las asociaciones. Esta ha sido una carencia básica de buena parte de las acciones de reforma económica emprendidas en Cuba, en unos casos por producir una atomización de los sujetos involucrados (por ejemplo en el trabajo por cuenta propia), y en otros, como es el caso de las UBPC, porque el principio asociacionista ha quedado constreñido al marco de las propias organizaciones y con fines productivistas muy utilitarios.

Sin embargo, es importante advertir que la sociedad cubana contemporánea es testigo de la emergencia de formas de organización social, básicamente a nivel barrial, que intentan de manera incipiente ofrecer una alternativa de desarrollo y convivencia desde la comunidad, y superar así la tradicional antinomia mercado-Estado que ha llenado la discusión pública en Cuba durante años, y que trágicamente parece resolverse en favor del primero. A diferencia de experiencias similares en América Latina, aquí se trata de una práctica participativa que incluye a un sujeto altamente calificado y con una experiencia política considerable adquirida durante decenios de movilización y participación locales. Pero al igual que ellas, estos incipientes movimientos sociales y ciudadanos en Cuba sufren la incomprensión o la perspectiva utilitaria de los sectores burocráticos educados en el control y la asignación verticales de recursos y valores.¹³

Es, sin embargo, previsible que una buena parte de la economía cubana no será organizada siguiendo pautas cooperativas sino a partir de un patrón empresarial descentralizado, sea bajo el rubro de la propiedad estatal, mixta o privada. Ello dejaría resuelto un viejo reclamo en favor de mayores cuotas de descentralización, pero no necesariamente en función de la democratización y la socialización del poder. Dado que he discutido este punto en varios lugares, no me detengo en él ahora sino para argumentar que la descentralización que tiene lugar por la vía económico-administrativa (e inclusive mediante la transferencia de funciones del subsistema político al económico, potencialmente centralizador) está produciendo una fragmentación mayor del sujeto popular y el fortalecimiento de los sectores tecnocráticos, en la misma medida en que no conlleva un proyecto claro de ampliación de la participación y en que sus parámetros están severamente acotados por un criterio eficientista. De lo que se trata es de poner en práctica proyectos de cogestión y autogestión (según el

¹³ Para una interesante aproximación a este tema en Cuba ver: Armando Fernández y Rubén Otazo, "Comunidad, autogestión, participación y medio ambiente" en *La participación en Cuba y los retos del futuro...*, *op. cit.*

tipo de economía y propiedad) de los trabajadores en las empresas, en sustitución del actual esquema de participación limitada, y con un funcionamiento más autónomo de los sindicatos.¹⁴

Para decirlo más claramente: es imposible continuar funcionando con eficacia política, ni argumentar que se avanza en la construcción democrática, mucho menos enfrentar la ofensiva mercantilista, si no se produce una ampliación de los espacios participativos sobre la base de una mayor autonomía de las organizaciones populares y de los procesos de participación en sí mismos. Ello tiene un costo. Digamos, por ejemplo, que un sindicato más beligerante y dispuesto a representar con "voz propia" los intereses de sus representados pudiera provocar reservas en un capital extranjero poco sofisticado que busca maximizar ganancias al menor tiempo posible; o que el entramado burocrático existente vería con desagrado toda propuesta que fuese en detrimento de sus cuotas de poder. Costos nada insignificantes, pero en cualquier caso, costos imprescindibles.

Esta línea de análisis nos conduce a la necesidad de un rediseño del sistema político, incluso en términos institucionales. Este rediseño debe reunir tres cualidades, contradictorias pero no excluyentes. En primer lugar, debe garantizar la unidad de la nación frente a la injerencia imperialista. En segundo lugar, debe fortalecer al sujeto popular y a sus organizaciones, entendiendo la complejidad creciente de aquél. En tercer lugar, debe dar cuenta de la diversidad social sobre la base de la hegemonía popular y de la subordinación negociada de los sectores emergentes no incluíbles en este rubro.

Un primer eslabón de esta cadena sería un subsistema municipal más capaz y más participativo, como espacio primario de concertación de intereses y negociación de la(s) política(s), en lo cual Cuba posee un valioso caudal de logros y experiencias.¹⁵

En este contexto queda poco espacio para la forma tradicional de alimentación de la toma de decisiones plasmadas en el plan económico centralizado: la agregación de demandas por parte de la población y su transmisión a través de mecanismos verticalistas. En un escenario de negociaciones, el plan deberá ser

¹⁴ Por razones de espacio no puedo detenerme en el rol actual de los sindicatos. Valga anotar, sin embargo, que los sindicatos han sido la organización sectorial cubana que ha mostrado una mayor valentía y originalidad política de cara al ajuste y la reforma. He analizado parcialmente este rol en mi artículo "Comunidad, participación y socialismo: reinterpretao el socialismo cubano" en el libro *La participación en Cuba y los retos del futuro*. Posterior a este ensayo, la celebración del XVII Congreso de la Confederación de Trabajadores Cubanos, dio nuevas muestras del intento de los sindicalistas cubanos por producir una renovación de su accionar.

¹⁵ Haroldo Dilla *et al.*, *Participación y desarrollo en los municipios cubanos*, La Habana, Editora Política, 1993.

indicativo y sus propuestas alcanzadas a través de la concertación o de medios económicos.

A nivel macro, se impone una redefinición de la manera como se constituyen los órganos gubernamentales representativos a los diferentes niveles. Hasta el momento esto ha funcionado sólo a partir del voto popular organizado por territorios. Ello ha incidido, por un lado, en la ausencia de representación en los gobiernos locales de grupos de trabajadores ubicados en los territorios o en la subrepresentación de sectores marginalizados como las mujeres. Por el otro, en la erosión de las capacidades deliberativas de las instituciones representativas o en la recurrencia a ficciones legales con vistas a asegurar esta representación donde es imprescindible. Un nuevo diseño sugeriría la composición de estas instituciones a partir de fuentes diferentes que satisfagan las exigencias de la representación territorial, sectorial y de intereses. Siempre, por supuesto, considerando que todo ello pasaría por la validación real del precepto legal que confiere a los órganos representativos los mayores poderes estatales en cada territorio.

El Partido Comunista de Cuba no podría ser ajeno a esta transformación. De hecho tendría que ser su protagonista. Sólo él, organización centro del sistema político, con su más de medio millón de miembros educados políticamente en un compromiso medular con el socialismo, puede proceder a impulsar los cambios imprescindibles con los menores riesgos disruptivos, en aras de la consolidación de un genuino poder popular. Pero ello implicaría la propia transformación del Partido. Aquí se trataría de encontrar la forma de organización y funcionamiento más adecuada a las diferencias de intereses que serían reconocidas en los ámbitos social y político. En un primer escenario óptimo, esto conduciría a un partido más democrático, abierto al debate y permisivo de tendencias en el marco de la unidad de propósitos estratégicos. Pero no es aventurado afirmar que también podría conducir a un sistema multipartidista, particularmente si el Partido Comunista dejara de asumir su rol de vanguardia. En este sentido, un desplazamiento del sistema político en la dirección apuntada podría ayudar al surgimiento y desarrollo de opciones partidistas responsables y leales en términos de la continuidad sistémica.

Finalmente, el lector debe tener presente que éstas son sólo reflexiones que aspiran a ser parte de un debate, nunca una propuesta alternativa. Cualquier propuesta alternativa tendrá que ser una obra colectiva de millones de personas que hoy miran al pasado con orgullo, garantizan el presente con ingentes esfuerzos y tienen total derecho a controlar el futuro de sus vidas.